

Índice AI: NWS 11/29/94/s  
Distr: SC/CC/PG/CO

-----  
Amnistía Internacional  
Secretariado Internacional  
1 Easton Street  
Londres WC1X 8DJ  
Reino Unido

A: ENCARGADOS DE PRENSA  
De: OFICINA DE PRENSA DEL SI  
Fecha: 11 DE FEBRERO DE 1994

#### **SERVICIO DE NOTICIAS 29/94**

#### **ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO: GABÓN, PERÚ**

#### **INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO**

##### **\*\*Campaña de Indonesia - fines de septiembre\*\***

Tengan en cuenta que, por desgracia, la Campaña de Indonesia se ha tenido que demorar hasta fines de septiembre. Hilary Payne, de la Unidad de Campañas, les ha enviado un fax explicando los motivos. Desde un punto de vista informativo, la fecha de lanzamiento es mucho mejor, porque el 1 de octubre es el aniversario del golpe de Estado de 1965 -el aniversario más importante de Indonesia- y la fecha de lanzamiento de la campaña se aproximará todo lo posible. Espero que este hecho no cause muchas molestias. Seguiremos adelante y trataremos la campaña en la reunión de encargados de prensa de los días 19, 20 y 21 de febrero.

#### **COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES**

Reino Unido - 9 de febrero - VEASE SERVICIO DE NOTICIAS 170/93  
Kwait - 24 de febrero - VEASE SERVICIO DE NOTICIAS 170/93  
Mujeres - 8 de marzo - VEASE SERVICIO DE NOTICIAS 161/26

#### **COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS**

Parlamento Europeo y Manual de «desapariciones» y homicidios políticos - 23 de febrero - VEASE SERVICIO DE NOTICIAS 22/94  
Turquía - 10 de marzo - VEASE SERVICIO DE NOTICIAS 26/94

#### **PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA**

Arabia Saudita- 31 de marzo Les enviaremos más información próximamente.  
Colombia - 16 de marzo - VEASE SERVICIO DE NOTICIAS 123 + AUs AMR 23/56+57/93/S  
Sudáfrica - 23 de marzo - VEASE SERVICIO DE NOTICIAS 05/94

ÍNDICE AI: AFR 26/WU 01/1994  
11 de febrero de 1994

GABON: 69 PERSONAS MUEREN DURANTE LA NOCHE DEBIDO A LAS PESIMAS  
CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN EN UN CAMPO DE DETENCION GABONES

67 personas detenidas han fallecido en Gabón, al parecer por asfixia, después de haber permanecido en una celda junto con más de 200 detenidos. Las muertes parecen ser el resultado, en el mejor de los casos, de una grave negligencia por parte de las autoridades gabonesas. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Gabón a que garanticen inmediatamente la salud y el bienestar de los restantes detenidos y nombren una comisión de investigación imparcial y pública para que investigue dichas muertes.

Los 67 detenidos, todos ellos extranjeros procedentes de Africa Occidental, fallecieron el 3 de febrero de 1994 en el centro de detención de la gendarmería de Gros-Bouquet, en Libreville, capital de Gabón. Aunque el gobierno ha anunciado que nombraría una comisión de investigación, Amnistía Internacional siente preocupación porque la investigación pueda no realizarse o porque no cumpla con las normas internacionales de capacidad e imparcialidad. La organización de derechos humanos siente preocupación por la detención, en unas condiciones que suponen trato cruel, inhumano o degradante, de los inmigrantes a la espera de ser deportados. No se sabe si hay algún niño entre los 67 fallecidos.

El 4 de febrero, las autoridades de Gabón dijeron que las 67 personas procedían de distintos países de Africa Occidental, y que se encontraban entre los 226 inmigrantes que habían sido detenidos a su llegada a Gabón, en balsas improvisadas, unos días antes. Esperaban la deportación en campos de detención. Las autoridades dijeron en un primer momento que los detenidos se habían peleado entre ellos, pero más tarde dijeron que la muerte se había producido por asfixia. Sin embargo, fuentes independientes de Libreville que pudieron ver los cuerpos de las víctimas aseguraron que no presentaban signos de heridas. La creencia general es que los detenidos, que ya se encontraban debilitados por el viaje a Gabón y que, según informes, no habían comido desde que se encontraban bajo custodia, murieron por asfixia. Los informes sugieren que los 226 detenidos estaban en la misma celda.

Según los informes recibidos, un guarda del centro de detención dijo a los periodistas de Libreville que las autoridades del campo no podían alimentar a los detenidos porque no tenían dinero para comida o para la atención general. El ministro de Defensa, Seguridad e Inmigración, el general Martin-Fidèle Magnaga, admitió que en las celdas destinadas a albergar sólo a unos pocos detenidos a menudo se hacinaban hasta cien. Las condiciones penitenciarias en Gabón son, en general, muy duras, y Amnistía Internacional siente preocupación porque las condiciones de los inmigrantes en el campo de detención de la gendarmería de Gros-Bouquet son especialmente duras. Se cree que desde la muerte de estas 67 personas han sido detenidos más inmigrantes ilegales, que permanecen bajo custodia en el mismo centro de detención.

Algunos informes sugieren que una delegación francesa de consejeros militares en Gabón, que regresó a Francia el 9 de febrero, pudo haber tenido conocimiento de la situación del centro de detención de Gros-Bouquet. Un portavoz del gobierno francés ha negado cualquier implicación de la delegación en las decisiones que pudieron haber desembocado en la muerte de los 67 detenidos. También expresó su escepticismo ante la pretensión de que podían haber fallecido como resultado de una reyerta.

En los informes se afirma que el gobierno militar de Nigeria ha solicitado a su embajador en Gabón que investigue la muerte de 23 nigerianos que se supone se encontraban entre las 67 víctimas. Según los informes recibidos, el Consejo de Abogados de Gabón ha solicitado que se constituya una comisión de investigación independiente y que se realicen autopsias para determinar las causas de la muerte.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Gabón que cree una comisión pública, imparcial e independiente, para que investigue estas muertes. La comisión de investigación debe tener poderes no sólo para establecer la forma en que murieron estas 67 personas, sino también para identificar a todos los responsables a fin de que sean llevados ante la justicia. La comisión, que deberá estar formada por personas de reconocida imparcialidad e integridad, también debe hacer recomendaciones al gobierno sobre cómo prevenir dichas muertes y terminar con las duras condiciones de los centros de detención.

ÍNDICE AI: AMR 46/WU 01/1994  
11 de febrero de 1994

PERÚ: EL CASO DE LA CANTUTA SERÁ JUZGADO POR UN TRIBUNAL MILITAR

Amnistía Internacional siente profunda consternación por la decisión tomada por el Congreso peruano de llevar ante un tribunal militar el caso de los oficiales de ejército implicados en la presunta ejecución extrajudicial, en julio de 1992, de un profesor y nueve alumnos de la Universidad de La Cantuta.

La organización teme que esta decisión signifique que nunca se hará pública la verdad que subyace tras los secuestros y homicidios de julio de 1992, y que los militares y civiles responsables de haber dado y ejecutado las órdenes de secuestro y homicidio de las víctimas, y posteriormente de haber ocultado el crimen, no sean llevados ante la justicia.

Amnistía Internacional también teme que la decisión del Congreso sólo sirva para consolidar el sentimiento de las fuerzas de seguridad de Perú de que gozan de casi total impunidad. Los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales documentados por Amnistía Internacional desde principios de 1983 alcanzan la cifra de, por lo menos, 5000, pero únicamente en dos ocasiones los militares responsables han sido juzgados y declarados culpables.

Amnistía Internacional cree que los tribunales militares peruanos no tienen capacidad, imparcialidad e independencia para investigar y llevar ante la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, Amnistía Internacional comparte el punto de vista del Relator especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extralegales, Sumarias o Arbitrarias, el señor Bacre Ndiaye, que en su reciente informe sobre las violaciones de derechos humanos en Perú llegó a la conclusión de que "en el país hay una clara institucionalización de la impunidad". Pidió al gobierno de Perú que garantizara que los casos de ejecuciones extrajudiciales, incluido el de La Cantuta, quedasen excluidos explícitamente de los tribunales militares. El mes pasado, Amnistía Internacional recomendó a las autoridades que todos los implicados en el caso de La Cantuta comparecieran ante un tribunal civil. A pesar de estos ruegos, las autoridades de Perú persisten en que los graves abusos militares sean investigados y juzgados por militares.

Amnistía Internacional condena los graves abusos cometidos por los grupos armados de oposición en Perú. Entre ellos están la ejecución de las personas detenidas por dichos grupos, los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles, y los homicidios de miembros de las fuerzas de seguridad que están hors de combat (fuera de combate), o que están incapacitados, se han rendido o han sido hechos prisioneros por estos grupos. Sin embargo, dichos abusos nunca pueden justificar las violaciones por parte de las autoridades de derechos humanos fundamentales como los incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que forma parte Perú.